

AMPARO.

Recurso de amparo interpuesto ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por la Sra. D^a Isidora Díaz, contra la providencia de la Jefatura de Hacienda del Estado.

PROCEDIMIENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Se ha promovido en ese Juzgado de Distrito un recurso de amparo por la Sra. D^a Isidora Díaz, contra el ciudadano Gefe de Hacienda, por creer violadas en su persona las garantías constitucionales.

No obstante que el juicio se abrió á prueba, para que el Juzgado tuviera constancias auténticas á que atenerse en la definitiva, no se han rendido las adecuadas, pues que las producidas por la parte actora se han divagado de su objeto, y por ellas se han confundido los trámites de recursos distintos.

Por el mismo contenido de los escritos en que se fundan las quejas, y por los recaudos exhibidos, se ve de una manera patente que no hay conformidad en la parte actora, respecto á la liquidacion de cuentas y en el monto del adeudo, que hace efectivo la Jefatura de Hacienda.

De aquí se deduce, que si la cuenta es exacta ó no, si el Gefe de Hacienda ha cometido irregularidades en los procedimientos, ó abusos de fuerza; si acaso el negocio debe tramitarse en otra vía que la administrativa, es indudable que no precede el amparo, porque este versa sobre derecho meramente constitucional, y en el presente caso, procederá ó no recurso contencioso administrativo ó meramente judicial, pero de ningún modo de amparo, porque no hay infracción de garantía alguna constitucional.

Se ha querido fundar en que es ilegal la facultad económico-coactiva que compete al fisco, pero es un punto de manifiesto derecho, que está reconocida, sancionada y

mil veces reiterada ésta, para que pueda ponerse en duda su existencia legal.

Sobre si se ha usado bien ó mal; si la parte responsable la excedió ó no, avocaría recurso de responsabilidad en la forma competente y ante la autoridad respectiva, pero no es lo mismo disputar sobre la aplicación y uso de un derecho que es reconocido, que negar este mismo derecho en general. Distinto es el aplicarlo á casos de terminados en los que puede haber responsabilidad, á negar que esté tal derecho en general reconocido por la ley.

Así es que, sin calificar el Juzgado sobre la verdad ó falsedad de lo que hasta ahora ha sido alegado por la parte quejosa, pues no está en ese estado ni en esa vía el negocio, y concretándose solo á inquirir si hubo ó no violacion de garantías, no cabe duda que la resolución debe ser negativa, puesto que el amparo solo se funda en lo que alega la parte actora, no reconociendo la facultad económico-coactiva que al fisco compete.

Y como está mandado por la ley de la materia, que se sigan los trámites por procedimientos del orden jurídico, y siendo de esta clase la doctrina de que el juez en su sentencia sea conforme en resolver en lo que se ha demandado en la cosa, en la causa y en la accion; por cuanto á que el presente juicio se inició como de amparo, pero en realidad, se quiere hacer de responsabilidad ó contencioso administrativo, que el juzgado no ha prevenido; en virtud de tales razones y fundamentos, á reserva de las ulteriores que el juzgado suplirá en su justificación, el infrascripto Promotor fiscal en el presente alegato concluye pidiendo, se resuelva negativamente el curso promovido, dejando á salvo, si se quiere, los derechos que crea tener la parte actora sobre responsabilidad, para que los promueva en la forma y vía que correspondan, por no deber confundirse, tales juicios, con el amparo que no procede.

Aguascalientes, Diciembre veintinueve de mil ochocientos setenta.—*Carlos Suarez.*

*Dictámen del Asesor Lic. Pedro
J. Adame.*

“Señor Juez de Distrito suplente:

En siete de Setiembre del antepasado de ochocientos sesenta y nueve y por segunda vez, se presentó D^a Isidora Diaz de Leon, mayor de edad, de estado viuda, y albacea de su finado esposo Don Simon Ortuño (escrito de fojas 1^a á la 4^a), pidiendo que la justicia de la Union la ampare contra el embargo que asegura le hizo de sus fincas y bienes el Sr. Gefe de Hacienda, quien parece que efectivamente hizo esta ejecucion, tanto porque así lo asegura la parte quejosa, como porque así puede colegirse no solo del requerimiento que se ve al fin de la mal compaginada liquidacion de fojas 5 vuelta y 9 frente, sino tambien de la comunicacion oficial del empleado ejecutor, fojas 39 y 40. He dicho por segunda vez, supuesto que en el expediente á fojas 11 y 12 se ve, con el mismo objeto, otro escrito en que D. Zefirino Ortuño titulándose apoderado de la señora albacea y con fecha cinco de Julio del mismo año, pidió se lo amparara por el Juzgado de su digno cargo, contra el embargo que desde entonces puede presumirse haya ejecutado la Gefatura de Hacienda. A esta solicitud que sin haber justificado el petente su personería le fué admitida de pronto, se proveyó entre otras cosas, la excusa que sentó el señor juez propietario y la reserva que se mandó hacer del ocurso hasta que los señores jueces suplentes estuviesen reconocidos y alguno de ellos pudiera tomar conocimiento del negocio.

Con esta providencia todo quedó suspenso, hasta que en nueve de Setiembre y á virtud del ocurso de la Sra. Diaz, con que se encabeza el expediente, tuvieron lugar los procedimientos subsecuentes hasta poner el juicio en el estado en que se encuentra (fojas 38 vuelta,) y en el que lo he recibido para consultar cuando apenas acababa yo de llegar á esta capital de donde me habia ausentado desde el año pasado por causa de algunos negocios que me obligaron á salir.

En los dos escritos de que he hecho mencion, se solita el amparo de la justicia federal, contra el embargo que apenas lógicamente podemos suponer haya ejecutado el funcionario de quien se queja la Sra. Diaz, fundando su peticion, no solo en lo exajerado de la liquidacion de fojas 5 vuelta y 9 frente, sino tambien en el argumento que forma de la inconstitucionalidad de la existencia y ejercicio de las facultades economico-coactivas de los empleados fiscales que se erigen en tribunales para ejecutar, siendo partes que únicamente deben sujetarse á pedir; pues que esas facultades coactivas creadas por la ley de 20 de Noviembre de 1888 solo debian tener lugar en tanto que no hubiese cuestion, pues, en caso de haberla, todo debia sujetarse á la decision judicial; y por último, se funda tambien el pedido en la disposicion de los artículos 16, fraccion 1^a del 101 de la Constitucion general de la República y artículo 1^o de la ley de 20 de Enero del año próximo pasado.

Despues de haberse mandado suspender los procedimientos administrativos de la oficina ejecutora por auto de 1^o de Diciembre, fojas 36 frente, y abierto y prorogado el término probatorio por decretos de 11 y 15 del mismo mes, fojas 38 vuelta y 45 frente, con escrito de la última fecha, pidió se tuviesen como presentados por prueba el requerimiento y liquidacion de fojas 6: la liquidacion de fojas 5 vuelta y 9 frente, así como el testimonio de fojas 7 y 8, en que positivamente resulta comprobado, que del capital de mil ciento once pesos once centavos en que se remataron al esposo de la Sra. Diaz, las fracciones 20 y 21 de la Hacienda de la Tinaja, solo se debian segun la liquidacion de fojas 6, quinientos setenta y nueve pesos y centavos; y que traspasadas esas fracciones á D. Margarito Esparza en quinientos pesos, con expreso permiso de la oficina respectiva y su gefe (testimonio de fojas 7 y 8,) no puede haber quedado el crédito sino en *setenta y nueve pesos noventa y dos centavos*, que resultan como

diferencia y á primer golpe de vista comparando esos recados con la partida relativa, visibles en la liquidacion de fojas 5, producida mucho tiempo despues de aquel traspaso. A ese mismo escrito acompañó la Sra. Diaz el testimonio del acta de remate de una finca urbana situada en la calle de Washington, comunmente llamada de los Gallos, que se adjudicó á Ortuño en cuatrocientos sesenta y cuatro pesos, fojas 47 á la 73, el 29 de Agosto de 1857; igualmente presentó veinte recibos ó certificados de pago de mensualidades; otros nueve certificados relativos al pago de réditos, fojas 77 á la 85; una liquidacion formada por D. José María Muga, fojas 76, que no debió admitirse por no estar en papel del sello correspondiente, y un certificado del prefecto del tiempo del Imperio, fojas 75, en que aparece una razon del adeudo relativo á la adjudicacion de la insinuada casa.

Por auto de 20 de Diciembre se declaró cerrado el término probatorio, previniéndose á las partes que podian alegar de su derecho en el término de seis dias, para lo que quedaban en la secretaría los autos respectivos. La astora no produjo alegato alguno, y el señor Promotor lo exhibió dos dias despues del auto de 27 del próximo Diciembre, en que se declaró pasado ese término, fojas 46 vuelta, y se notificó á las partes.

De las pruebas aducidas por la Sra. Diaz de Leon, albacea de D. Simon Ortuño, no solo resulta la remarcable diferencia del adeudo de que ántes he hablado; la confusion de los certificados de pago, que como en los de fojas 73 y 74, era preciso hacer previamente una distribucion para saber lo que tocaba de esas sumas á cada una de las fincas adjudicadas á Ortuño; y finalmente, la inexactitud de la liquidacion de 9 de Junio, que seguramente sirvió de base á los procedimientos de la ejecucion; pero del conjunto de todas estas pruebas, aun poniendo la ejecucion, no resulta la violacion de garantías que pudieran servir de apoyo al amparo que se solicita, pues cuando mas,

solo tendria lugar la responsabilidad contra el empleado ó empleados fiscales que sin rectificar el adeudo legal, llevasen adelante sus procedimientos administrativos, segun lo que diré mas adelante. En la sustanciacion del juicio, ademas del retardo que se nota, hay una cosa que llama la atencion, y es: que el Lic. D. Pedro Perez Maldonado, siendo el ascensor nombrado desde un principio en este juicio y habiendo emitido las consultas que se registran á fojas 4 vuelta, 13 frente y 15 frente, y de las cuales cobra derechos por la última, se haya excusado despues (fojas 88), alegando que ha dirigido á la Sra. Diaz de Leon. Evidentemente esta es una falta de las que como abogado castiga la ley 15, título 22, libro 59 de la Novísima Recopilacion; pero como el ascensor se identifica con la persona del juez, y de las faltas de este, solo el superior tiene la facultad de corregirlas, nada deberémos decir sobre el particular en la sentencia de primera instancia. Bajo estos conceptos y abrazando de una ojeada la pretencion de la Sra. Diaz de Leon, en que solicita amparo; las pruebas que ella misma ha aducido, con las disposiciones legales en que pretende apoyarse, y considerando, en primer lugar: que la ley de 20 de Noviembre que concedió á los jefes de oficina de hacienda, facultades económico-coactivas, está vigente y se hace necesario su existencia para asegurar los intereses fiscales, no solo respecto de los deudores morosos, sino aun de los que no lo son; pero que por desafecto ó otras causas, que no es del caso referir, demoran y retardan sus pagos, de donde resulta que ni incurren ni se les puede exigir responsabilidad alguna á los funcionarios de esa clase, cuando en virtud de esas facultades, aseguran con embargo de bienes el pago de lo que se adeuda al erario, pudiendo en seguida y conforme con la autorizacion que conceden las leyes de reforma, especialmente la de 5 de Febrero de 861 en su art. 36, y por lo relativo á las operaciones de desamortizacion, vender y rematar las fincas ó bienes embargados, hasta cubrir el total arreglo fiscal,

sin que por esto pueda decirse que se afectan en manera alguna las disposiciones contenidas en el art. 16 de la Constitución general de la República, porque según lo que dejó expuesto y con apoyo de las disposiciones antes citadas, no cabe duda en que los jefes superiores de hacienda son competentes para asegurar los intereses del fisco y tienen la facultad de enajenar las fincas ó bienes ejecutados, cuando especialmente, como en el caso que nos ocupa, haya de tratarse de redenciones no satisfechas. Considerando en segundo lugar: que si bien el actual señor jefe de hacienda, ó su antecesor (porque no consta de autos cuál de ellos haya sido el que ejecutara los bienes), ha podido incurrir en un error al efectuar el embargo, proveniente de la inexactitud de la liquidación de fojas 5 vuelta, este mal ha podido remediarse con solo no haber omitido la señora albacea el abonamiento indispensable con el funcionario ejecutor y llevado consigo todos los documentos y certificados propios y de pago, para hacer que se rectificase esa misma liquidación como debió hacerse, tanto porque en ello se interesa la justicia que asiste á las partes, como porque así lo demanda el decoro y dignidad del Supremo Gobierno, no ménos que el honor, categoría y buen nombre de los empleados que lo representan, y con lo cual evitarán estos las responsabilidades que de otro modo podrán echar sobre sí, manchando el decoro de la administración pública. Considerando en tercer lugar: que por las razones ya insinuadas no puede decirse que la autoridad con que ha procedido el señor jefe de hacienda al embargo de los bienes de la testamentaria de Ortúño, ha violado garantías individuales que pudieran dar lugar á la fracción 1ª del art. 101 de la carta fundamental que se alega; para lo cual debe atenderse también á que no solo de las liquidaciones bien ó mal formadas que se registran en estos autos, sino también de la confesión explícita de la Sra. Díaz, aparece, que es deudora al erario federal por causa de redenciones; reduciéndolo

se la cuestión á si el adeudo es, en mas ó ménos cuantía, por la que debió haberse ejecutado á la testamentaria deudora y lo que dará por resultado si se quiere, una responsabilidad que se podrá exigir al jefe de la oficina ejecutora. Considerando en cuarto lugar: que ni aun resulta plenamente justificado en este juicio el que efectivamente se haya ejecutado el embargo de que se queja la Sra. Díaz, ignorándose no solo el día y hora en que se haya efectuado, sino aun el jefe ejecutor, pues no sabe si fué D. Antonio Cornejo que suscribió las liquidaciones y requerimientos de fojas 5 y 6 frente, ó D. Manuel Empáran, autor de la comunicación de fojas 39 y 40, que es el que actualmente se halla al frente de la oficina, sobre todo lo cual no aparecen en este juicio los datos propios ó indispensables del caso. Considerando, finalmente: que tanto la Sra. Díaz como todos sus hijos, están declarados pobres de solemnidad por auto de 30 de Noviembre de ochocientos sesenta y ocho, visible en testimonio, á fojas 28 frente, y que por lo mismo se deben exceptuar de la pena que demarca el art. 16 de la ley de 20 de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve, soy de parecer: que citando v.d. á las partes para sentencia definitiva, con apoyo de las razones que dejó expuestas y disposiciones legales en que se fundan, falle este juicio declarando.

1º Que no ha lugar á que la justicia de la Unión ampare á la parte de Dª Isidora Díaz de Leon, albacea de su finado esposo D. Simon Ortúño, contra el embargo de bienes que asegura le hizo la Gefatura de Hacienda, para cubrir el adeudo que por causa de redenciones tiene pendiente con el erario federal.

2º Que no tiene caso la pena que demarca el art. 16 de la ley de 20 de Enero ya citada, por estar declarada la Sra. Díaz pobre de solemnidad.

3º Que se remitan estos autos á la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los efectos que determina la parte final del artículo 13 de la propia ley.

4º Quedan á salvo los derechos de la Sra. Diaz, para que pueda exigir las responsabilidades que quiera, ó los deduzca como mejor le convenga.

Tal es, señor juez, mi parecer, al que se podrá vd. adherir si los creyere arreglado.

Aguascalientes, Enero diez y nueve de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Pedro J. Adame.*

Sentencia del juez 3º suplente de Distrito.

“Aguascalientes, seis de Febrero de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este recurso de amparo promovido por la Sra. Dª Isidora Diaz de Leon, de esta vecindad, viuda y albacea del finado D. Simon Ortuño, contra la Gefatura de Hacienda del Estado por violacion de las garantías que se expresan; el juez que suscribe, de conformidad con el dictámen que antecede y con apoyo de las razones y fundamentos legales que sienta el ciudadano asesor, falla el presente juicio con las siguientes proposiciones:

1º No ha lugar á que la justicia de la Union ampare á la parte de la Sra. Dª Isidora Diaz de Leon, albacea de su finado esposo D. Simon Ortuño, contra el embargo de bienes que asegura lo hizo la Gefatura de Hacienda, para cubrir el adeudo que por causa de redenciones tiene pendiente con el erario federal.

2º No tiene caso la pena que demarca la ley de 20 de Enero de 1868, por estar declarada la Sra. Diaz pobre de solemnidad.

3º Remítanse estos autos á la Suprema Corte de justicia de la Nacion para los efectos que determina la parte final del artículo 13 de la propia ley.

4º Quedan á salvo los derechos de la Sra. Diaz, para que pueda exigir las responsabilidades que quiera, ó los deduzca como mejor le convenga; y

5º Notifíquese esta sentencia, y con el dictámen que la precede publíquese en los periódicos conforme el artículo 27 de la ley citada. El ciudadano Nicolás Diaz, juez 3º suplente de Distrito en este Estado, así lo decretó y firmó: damos fé.—*Nicolás Diaz.*—*A., Macedonio Marin.*—*A., Arcadio Juarez.*”

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero veintidos de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por Dª Isidora Diaz de Leon, como albacea de su finado esposo D. Simon Ortuño, contra el procedimiento de la Gefatura de Hacienda de ese Estado, por las órdenes de embargo de bienes dictadas por esa oficina para cubrir el adeudo que por causa de redenciones tiene la testamentaria con el erario Nacional: Vistos los fundamentos en que apoya la Diaz de Leon su solicitud de amparo; la suspension del acto reclamado, en cuanto al embargo de la finca á que se refiere la peticionaria, en su respuesta á la notificacion del auto de 30 de Noviembre de 1870; las constancias presentadas por la parte de la testamentaria en el término de prueba; el parecer del Ministerio público; la opinion del asesor y la sentencia del Juzgado de Distrito que niega el recurso con todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente.

Considerando: Que si bien la Gefatura de Hacienda ha estado dentro de la órbita de sus facultades al proceder al embargo de los bienes de la testamentaria, para poner á salvo los intereses del fisco, segun las prescripciones legales, no lo ha estado para llevar á remate los bienes embargados, desde el momento en que el albacea de la testamentaria de Ortuño presentó á la oficina los documentos que contradecian la liquidacion practicada por la Gefatura y que mo-

tiva una demanda de la competencia de los Tribunales de la Federacion, como lo determina la ley que estableció la facultad económico-coactiva, resultando, por consecuencia, con los procedimientos de la Gefatura de Hacienda, violada la garantía otorgada en la parte final del artículo 14 de la Constitucion de la República. Con tales fundamentos se decreta:

Primero: Que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Aguascalientes, que negó el recurso de amparo á la Sra. Diaz de Leon, albacea y representante de la testamentaría de su finado esposo D. Simon Ortuño.

Segundo: Se ampara y protege á la quejosa contra el acto de la Gefatura de Hacienda, que mandó rematar unos terrenos pertenecientes á la testamentaria, despues de la oposicion de la albacea, que motivaba un juicio ante los Tribunales federales.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron, por unanimidad de votos, los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados- Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Iramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Marzo dos de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, por el ciudadano Lic. Simon de la Garza y Melo, apoderado de D. Carlos Martinez, contra una orden del Alcalde 1º de aquella capital, por la cual se le manda ejecutar un trabajo personal sin retribucion.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice:

Que está sustanciándose, conforme á la ley respectiva, este juicio de amparo, promovido por el Lic. D. Simon de la Garza y Melo en representacion de D. Carlos Martinez, con motivo de una comision dada por el ciudadano Alcalde 1º de esta ciudad, con fecha 15 de Diciembre del año próximo pasado á este Sr. para que en union de D. José María Cárdenas procediera á formar un padron de todos los niños y niñas de la 3ª seccion de esta Municipalidad, que conforme á la ley del Estado expedida con fecha 30 de Noviembre último, declarando obligatoria la instruccion primaria, deben concurrir á la escuela, ya pública, ya particular, cuyo trabajo personal debia estar concluido dentro de los quince dias siguientes; y que no habiendo admitido dicha comision el expresado señor Martinez, excusándose por las razones que expone en su contestacion de fecha 22 del propio Diciembre, se ha, sin embargo, insistido en que la cumpla imponiéndosele, ademas, una multa de cinco pesos, por haber manifestado despues no estar dispuesto á prestar ese trabajo personal, acojiéndose para ello á la garantía que le otorga en su artículo 5º la carta fundamental de la República. Suspenso ya el acto reclamado por auto de 30 de Diciembre último, para cuya pronunciacion se dió la audiencia de que se habla en el art. 5º de la ley de 20 de Enero de 1869; y ren-